

La nueva Ley de Servicios Sociales: más sombras que luces

La primera lectura de la nueva Ley de Servicios Sociales que acaba de aprobar el *Parlament de Catalunya* me ha generado un sentimiento profundamente contradictorio: se ha ganado una batalla que hace prever una derrota final. O si se quiere decir de otra forma: se han abierto muchas posibilidades para la política social pero están mayoritariamente situadas en la dirección equivocada.

Sería absurdo negar la importancia de la *victoria* que supone esta nueva ley. Fundamentalmente, haber convertido cualquier soporte social en un derecho objetivo, reclamable a las administraciones, no dependiente de voluntades benéficas. También, la universalidad, entendida formalmente como la disponibilidad y la accesibilidad para cualquier ciudadano o ciudadana. En el haber también podemos colocar el reconocimiento de un sistema público de servicios sociales al que se le ha dado un mínimo orden y carta de naturaleza para que pueda ir de colega con los demás sistemas denominados “pilares del estado de bienestar” como, por ejemplo, la salud o la educación. Llegados aquí, también puede colocarse en este balance positivo el reconocimiento de la iniciativa social y algunos aspectos, no todos, de la distribución de competencias y la implicación de las administraciones locales.

Pero una vez más se trata de una ley en la que, cuando se pasa de la música orquestal a la melodía de fondo, algunos profesionales nos sentimos decepcionados y detectamos una más que probable orientación negativa de la atención a las personas como personas y la dificultad para construir un nuevo discurso de servicios sociales para una sociedad compleja, cambiante, que tiene como gran reto la lucha contra la exclusión y la fragilidad social. Ésta es una ley (una más) de prestaciones, de cartera de servicios, de catálogo de recursos y de usuarios. No es una ley que reoriente la forma de atender a las personas. Con ella, los diferentes profesionales de la atención social será todavía más que ahora gestores de prestaciones, pero no dinamizadores de la comunidad, acompañantes de procesos de cambio personal o grupal.

Los principios y criterios de intervención no los cumple ni la propia Ley

Es la ley de este ámbito que tiene la lista más larga de la historia de maravillosos principios y criterios rectores, pero muchos de ellos son indirectamente violentados en el articulado siguiente. La preocupación comunitaria, por ejemplo, aparece algunas veces, comenzando por cuando se describen las finalidades de los servicios sociales pero, después, es prácticamente imposible encontrar alguna competencia o servicio que sea definido desde esta perspectiva, que recuerde que, para atender a las personas, hay que prestar atención a su entorno y hay que trabajar las visiones sociales de las dificultades, etc. No sé cuantos alcaldes o concejales de servicios sociales encargarán a sus profesionales que hagan *trabajo comunitario*. Me temo que no está en la lista de servicios a prestar.

El criterio de universalidad, o el de normalidad, o el de globalidad quedan como un *brindis al sol* cuando uno llega al artículo 7 y ve la lista de “*necesidades de atención especial*” (de la que depende después la elaboración de *planes sectoriales* por parte del Gobierno) y ve quiénes son los “*destinatarios de los servicios sociales, especialmente*”. Se trata de una lista heterogénea de *desgracias sociales*, de categoría, origen y sentido inclasificables, en la que la perla es la “*Violencia y delincuencia juveniles*” (¡Tantos años de *predicar* sobre el tema, para que ahora la ley diga que es una categoría diferente de problema joven – no adulto- que necesita de la preocupación singular de los servicios sociales!).

Se reconoce el derecho a participar (más de las entidades que de las personas) pero no queda claro que los profesionales que intervienen trabajarán conjuntamente con la persona para elaborar los planes de mejora o de cambio. Reaparece continuamente el concepto de diagnóstico (*social*) referido a las personas, reforzando implícitamente la idea de la necesidad y la dificultad social como problema, como trastorno. Por lo menos, podían haber hablado de *codiagnóstico* o de *diagnóstico de situación*, para implicar a las personas e insistir en la consideración del contexto.

Cita reiteradamente la palabra de moda: “el trabajo en red”. Pero no va más allá de la reiterada manifestación de coordinación. La ley no cumple ni el primer principio del trabajo en red que es que la persona pueda pedir ayuda en cualquier punto, con independencia de si es atención básica o especializada. Sigue persistiendo el principio de derivación y la necesidad de que todo el mundo empiece por debajo, por los servicios sociales de base que son los que han de comenzar por realizar un informe.

Continúa la pretensión de atender enfermos sociales

La gran ficción sobre la que se basa la ley (pero igualmente el discurso político dominante y buena parte de las políticas sociales) queda resumido en el artículo 24, 3, en el que se da por supuesto que se prestan siempre servicios claramente definidos, a población que puede ser acotada, por profesionales concretos y con criterios definidos de evaluación. Escasamente diferente de un sistema clínico de definición de enfermedades y fármacos. Pero ¿no habían quedado en que facilitaban la autonomía, la incorporación, la subsistencia, la reducción del malestar, etc.? ¿No podríamos acordar definir necesidades y no personas etiquetadas como necesidades, dificultades complejas y no enfermedades individuales?

Podría seguir, pero éste es un primer comentario breve. Sólo, para seguir con los ejemplos, un apunte sobre *dos funciones* importantes: el profesional de referencia y el asistente personal. Tal y como están descritas, el primero es un simple profesional de los servicios de base destinado a gestionar permanentemente el caso, nada de la filosofía del profesional que acompaña un proceso y puede estar ubicado en diferentes servicios. La segunda *función*, asistir personalizadamente para que la autonomía global sea posible, se ha convertido en poco menos que una nueva profesión que tendrá regulación específica.

Pero lo más grave de todo es el “*Catálogo clasificado de servicios y prestaciones*” del anexo de la ley. Reconozco el esfuerzo de clasificar lo inclasificable a quien lo haya hecho, pero desconozco como se ha podido dar carta de naturaleza legal a una lista de servicios que, si algo evidencia es la fragmentación, la reduplicación, la desconexión, la patologización, etc. Es materialmente imposible que existan tantos grupos diferenciados de personas que necesiten de forma singular y diferenciada alguno de estos servicios. ¡Qué maravillosa hubiese sido la ley si, por lo menos, se hubiera atrevido a poner orden, a hacer una propuesta sensata de servicios coherentes e integrados!

Todo puede tener arreglo. La ley puede ser útil y razonable si la interpretación (forzada en algunos casos) responde a propuestas técnicas renovadas (lejos del clásico discurso de servicios sociales) y políticas sociales distantes del reparto de ayudas y prestaciones que hoy domina.

Jaume Funes
Psicólogo